

1º.- Con fecha 20 de febrero de 2023 tuvo entrada en RENFE-Operadora, E.P.E., al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, (en adelante, Ley de Transparencia), solicitud de _____, que quedó registrada con número de referencia 001-076590. A partir de la referida fecha comenzó a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la citada ley para su resolución, plazo que fue ampliado.

2º.-En virtud de la referida solicitud, se requiere acceso a la siguiente información:

Asunto

A RENFE OPERADORA

Información que solicita

- 1.- Copia de la documentación en poder de Renfe poniendo en su conocimiento la problemática existente con los nuevos trenes encargados a la empresa CAF y cuyas dimensiones los hacen inviables en las comunidades de Asturias y Cantabria.*
- 2.- Copia de la documentación acreditativa de las actuaciones realizadas por Renfe desde que tuvo conocimiento de la problemática que afectaba a los nuevos trenes que debían circular en Asturias y Cantabria para intentar evitar retrasos en su puesta en funcionamiento.*
- 3.- Copia de la documentación y del acuerdo acreditativo del cese del Responsable de gestión del material y del resto del personal de Renfe que haya sido cesado o relevado.*

3º.- En relación con las peticiones 1.- y 2.-, el propio CTBG ha establecido en diferentes Resoluciones que la Administración no tiene obligación de publicar información que pueda suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de las empresas que dependen de ella.

Esa doctrina administrativa reconoce que si se hiciese pública determinada información sobre eventuales incidencias en los servicios se podría crear una percepción en el público que afectaría de manera significativa e injustificada a los intereses económicos y comerciales de las empresas, circunstancia que exige considerar y tratar este tipo de información como un secreto comercial.

Sin perjuicio de que la doctrina expuesta justifica la aplicación del límite al derecho de acceso previsto en el artículo 14.1.h) de la Ley de Transparencia, toda vez que el Criterio Interpretativo 1/2019, de 24 de septiembre, establece que la aplicación de dicho límite no debe ser automática, resulta no obstante precisa la realización de un «test del daño», mediante el cual se valore el perjuicio que produciría la difusión de información como la requerida, y que su resultado se pondere con el del denominado «test del interés público».

En relación con el test del daño, cabe señalar que, igualmente que la fabricación de material ferroviario, los servicios ferroviarios compiten en mercados plenamente liberalizados. En efecto, no hay intervención administrativa en el mercado de suministro de material ferroviario y los servicios de transporte están sujetos a competencia, señaladamente intermodal, (principalmente con autobuses, taxis, vehículos VTC y coches particulares). En este entorno de mercado, y sin perjuicio de la afectación a otras empresas y organismos públicos, conceder acceso a información sobre determinadas incidencias en el desempeño empresarial, como las

relativas a los problemas advertidos en la adquisición de nuevo material rodante, y las legítimas decisiones adoptadas en el seno empresarial, supondría hacer pública información privilegiada y sensible cuya utilización descontextualizada causaría perjuicios reputacionales injustificados.

En consecuencia, teniendo en cuenta el perjuicio que la divulgación de la información solicitada le causaría tanto a Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., como a la empresa que está diseñando y fabricará el material rodante y al modo ferroviario en su conjunto, cabe concluir que el test del daño ofrece en este caso un resultado negativo.

Por otro lado, en lo que respecta al test del interés público, sin perjuicio de que desde Renfe y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha venido publicando de forma activa información actualizada sobre la proyectada renovación de la flota de trenes ancho métrico, es preciso señalar que la información solicitada no guarda relación con el ejercicio de funciones públicas ni con el manejo de fondos públicos, sino con un contrato de naturaleza privada suscrito entre dos sociedades mercantiles.

Este contrato se ha sometido a concurrencia en virtud de lo dispuesto en la legislación aplicable tanto a las empresas públicas (incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia) como a las privadas (no incluidas en ese ámbito subjetivo de aplicación). En consecuencia, cabe concluir que la información solicitada no guarda relación con el procedimiento de toma de decisiones públicas, ni tiene por objeto fiscalización alguna de carácter presupuestario, por lo que se encuentra lejana de los objetivos y fines que persigue la normativa de transparencia administrativa.

En consecuencia, cabe concluir que el test del interés público ofrece en el presente caso un resultado negativo, el cual, unido al resultado negativo que igualmente ofrece el test del daño, justifica la aplicación del límite previsto en el artículo 14.1.h) de la Ley de Transparencia.

4º.- En relación con los perjuicios que se han enunciado en el apartado 4º anterior, es necesario añadir además que facilitar determinados datos detallados sobre contratación, productos contratados y medidas de organización interna adoptadas también tendría una incidencia negativa en la garantía de la confidencialidad y el secreto requerido en los procesos de toma de decisiones empresariales, circunstancias que hacen igualmente preciso traer a colación el límite al derecho de acceso previsto en el artículo 14.1.k), de la Ley de Transparencia.

5º.- En definitiva, sobre las cuestiones 1.- y 2.- contenidas en la solicitud cabe concluir que facilitar información como la pedida afectaría a los legítimos intereses económicos y comerciales de una mercantil, Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. (además de la eventual afectación de la otra parte de un contrato) y a la garantía de la confidencialidad y el secreto requerido en los procesos de toma de decisiones empresariales. Asimismo, la utilización descontextualizada de la información solicitada podría dar lugar a un injustificado descrédito del modo ferroviario en su conjunto, susceptible de afectar negativamente a la prestación de un servicio de transporte en el régimen de competencia descrito. Por estas razones, no cabe admitir la solicitud en cuanto a dichos apartados 1.- y 2.-.

6º.- Entrando ahora en el apartado 3.- de la solicitud, relativa a los acuerdos de cese del personal relevado, hay que informar que se refiere a trabajadores con un contrato laboral ordinario con una mercantil. No son funcionarios, ni tampoco personal laboral al servicio de **una Administración pública. Por ello, no hay tales 'ceses' ni acuerdo o acto administrativo al respecto**, que no procedería en ningún caso cuando se trata de una relación laboral común con una sociedad anónima.

7º.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

Madrid, en la fecha de la firma electrónica.

El Gerente de Área de Relaciones Institucionales de RENFE-Operadora E.P.E.

D. Sergio Bueno Illescas

En virtud de Resolución de 12 de enero de 2023, de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora, E.P.E., sobre delegación de competencias, publicada